



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 13/08/2.020.

Radicado	08001-33-33-014-2020-00133-00
Medio de control o Acción	Tutela
Demandante	Javier de Jesús Donado Gutierrez
Demandado	Nueva E.P.S.
Juez (a)	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor juez, paso el expediente de la referencia, contentivo de una acción de tutela, informando que el mismo fue asignado a este Despacho por reparto. Contiene solicitud de Medida provisional. Consta de un cuaderno principal de 20 folios.

PASA AL DESPACHO
Para analizar admisión de demanda de tutela con medida cautelar

CONSTANCIA
Acta individual de reparto del 12/08/2.020

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, trece (13) de agosto de dos mil veinte (2.020).

Radicado	08001-33-33-014-2020-00133-00
Medio de control o Acción	Tutela
Demandante	Javier de Jesús Donado Gutierrez
Demandado	Nueva E.P.S.
Juez	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

El señor **Javier de Jesús Donado Gutierrez**, quien actúa en nombre propio, presenta demanda en ejercicio de la Acción de tutela contra la **Nueva E.P.S.**, solicitando el amparo a los derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad social, la libre elección de I.P.S., continuidad en la prestación de servicios de salud.

Previo a decidir lo que corresponda sobre la admisión de la acción de tutela, advierte el Despacho que en el presente caso se solicita una medida provisional con el fin de proteger los derechos fundamentales de la accionante, de conformidad con los artículos 7 del Decreto 2591 de 1991 y 230 de la Ley 1437 de 2011.

Ahora bien, respecto a la medida provisional solicitada por el accionante, el despacho considera que la acción de tutela, prevista por el artículo 86 de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares, en los casos en que así se autoriza.

El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, establece que el juez constitucional cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere” y dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a petición de parte. En efecto, el artículo 7, dispone:

*“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho.
Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso”*

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que las medidas provisionales pueden ser adoptadas en los siguientes casos: “(i) cuando resultan necesarias para evitar que la



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación o; (ii) cuando habiéndose constatado la existencia de una violación, estas sean necesarias para precaver que la violación se torne más gravosa” 1. (Autos A-040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A-049 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz), A-041A de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y A-031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz).

Dice además la Corte que las medidas cautelares pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, pues “únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida”. (Auto 035 de 2007.)

En cuanto a la procedencia de la medida de suspensión provisional la Corte Constitucional ha expresado:

“La medida de suspensión provisional de actos concretos debe ser razonada y no arbitraria, producto de una valoración sensata y proporcional a la presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales alegados. Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender provisionalmente la aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren un derecho fundamental, pero solamente cuando sea necesario y urgente para la protección del derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación de la medida”[4].¹

De igual forma, para proceder a decretar una medida, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que toda medida provisional debe cumplir con dos principios *fumus boni iuris*, y el *periculum in mora*, como lo estableció en la sentencia SU-913 del 2.009, diciendo:

“(…) En tanto se analizaron dos de los más importantes principios que rigen la práctica de medidas cautelares, para efecto de garantizar un justo término de equidad en el proceso. Estos son: el periculum in mora y el fumus boni iuris, los cuales deben aparecer de forma concurrente para asegurar la proporcionalidad y congruencia de la medida. El primero, periculum in mora, tiene que ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. El segundo, fumus boni iuris, aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal. Estos dos principios, asegura la doctrina, deben operar de manera concurrente, al punto que la falta de uno de estos elementos, debe dar lugar a que: i. se rechace la medida cautelar o ii. Se otorgue la medida pero de manera limitada. Por ejemplo, si el valor de la causa en juicio ejecutivo es proporcionalmente mínimo a la solvencia del demandado, la medida carecerá de periculum in mora, caso en el cual no habrá necesidad de hacer juicio alguno sobre el principio fumus boni iuris, pues de plano resulta innecesaria la medida”

¹ T-733 de 2013

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Más recientemente, la Sala Plena de la Corte Constitucional, reorganizó estos requisitos en solo tres². Aunque simplifica el análisis, también lo hace más estricto para el juez de tutela que pretenda aplicar el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. De acuerdo con esta reformulación, la procedencia de la adopción de medidas provisionales está supeditada al cumplimiento de las siguientes exigencias:

- “ (i) Que la medida provisional, para proteger un derecho fundamental o evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos fácticos y jurídicos razonables, es decir, que tenga la apariencia de un buen derecho (*fumus boni iuris*);
- (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (*periculum in mora*); y
- (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.”

Teniendo en cuenta lo anterior, la accionante en este caso, solicitó como medida provisional que:

“(…) Solicito al señor juez, que haciendo uso de lo establecido en el artículo 7 y 8 del Decreto 2591 de 1.991 y demás Normas Legales y Jurisprudencias que regulan la ACCIÓN DE TUTELA, se sirva ordenar como MEDIDA PROVISIONAL Y PARA GARANTIZARME EL DERECHO A LA VIDA ORDENE a la Accionada NUEVA EPS EXPIDA LAS ORDENES DE SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CICLOS DE QUIMIOTERAPIA - TERAPIA CON FINES CURATIVOS Y TODO EL TRATAMIENTO INTEGRAL , QUE REQUIERO EN RAZON DE MI PATOLOGÍA CONSISTENTE EN UN CÁNCER O LINFOMA DE HODKING CLÁSICO Y VIH, LO CUAL DEBE INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS QUE DEBEN SER APLICADOS EN LOS CICLOS DE QUIMIOTERAPIA, EN ESPECIAL LOS MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO, SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y TODO EL TRATAMIENTO MÉDICO INTEGRAL QUE ORDENE EL MEDICO TRATANTE.

ASI MISMO SE ORDENE Y GENERA LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA TERMINAR EL TRATAMIENTO EN CICLOS DE QUIMIOTERAPIA Y DEMÁS ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO Y DEMÁS QUE SE REQUIERAN; Y QUE DICHAS ÓRDENES SEAN DIRIGIDAS A LA CLÍNICA GENERAL DEL NORTE DE BARRANQUILLA, ENTIDAD QUE TIENE EL RECURSO TÉCNICO Y CIENTÍFICO PARA REALIZARLO DE MANERA OPORTUNA, QUIENES DETECTARON, DIAGNOSTICARON Y ESTAN TRATANDO MICASO OFRECIENDOME CONFIANZA PLENA(…)”

En consonancia, esta agencia, encuentra preciso señalar al respecto que la Corte Constitucional se ha referido a la configuración del perjuicio irremediable recientemente en sentencia T-020 de 2.018, con ponencia del Dr. José Fernando Reyes Cuartas, lo siguiente: *“De la configuración del perjuicio irremediable, se adujo que precisa verificarse: “(i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas para*

² Auto 312 del 2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

la efectiva protección de los derechos en riesgo[58].” Adicionalmente, se aclaró que: “...cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como (...) personas en condición de discapacidad, (...) entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos riguroso”

Dado lo anterior, y atendiendo la petición de medida provisional solicitada por el accionante, se acredita del resumen de historia clínica aportada al expediente que el señor Javier de Jesús Donado Gutierrez, le fue diagnosticado Linfoma Hodgkin Clásico y viene siendo atendido en la Clínica General del Norte.

Ahora, de tales elementos probatorios no se permite establecer con certeza los hechos expuestos por el accionante, y mucho menos podría hasta el momento catalogarse una evidente amenaza y/o posible vulneración de los derechos fundamentales alegados, visto que de los hechos plasmados en su libelo tutelar que al señor Javier Donado Gutierrez, no le ha sido negada la prestación del servicio de salud requerido, solo que fue autorizado por su EPS en una Institución Prestadora de Salud distinta a la que viene adelantando su tratamiento, por lo que es de precisar que la atención médica requerida, aparentemente no ha sido desatendida.

En concordancia a lo anterior, esta agencia judicial se abstendrá de conceder la medida solicitada, al no contar con los elementos fácticos suficientes que permitan establecer en esta etapa de la acción constitucional, que el cambio de I.P.S. por sí sola, le ocasione un perjuicio irremediable o amenaza derechos fundamentales al señor Javier Donado Gómez, en éste caso, que le afecten sus condiciones de salud.

De otra parte, se advierte del texto de la demanda de tutela y de los documentos anexos, que debe vincularse al presente trámite a la **Organización Clínica General del Norte y la Organización Clínica Bonnadona - Prevenir**, ante eventuales ordenaciones que se impartan por el despacho, y a su vez garantizando su derecho a la defensa.

De otro lado, respecto de la facultad para que el Juez de Tutela pueda decretar pruebas, la Corte Constitucional ha dicho en reciente jurisprudencia, la facultad – deber con que cuenta el Juez Constitucional para poder establecer si los hechos fácticos podrían evidenciar la existencia de una amenaza o vulneración del derecho fundamental alegado, como lo hizo en sentencia T-571 del 2.015, donde señaló:

Ahora bien, en caso de que el actor no aduzca pruebas que apoyen su pretensión, la Corte Constitucional ha sido enfática en declarar la facultad – deber que le asiste al juez constitucional de decretar pruebas de oficio, con las cuales se pueda determinar si realmente existe una amenaza o vulneración del derecho. En Sentencia T-864 de 1999, señaló: “Así las cosas, la práctica de pruebas para el juez constitucional no es sólo una potestad judicial, sino que es un deber inherente a la función judicial, pues la decisión con fuerza de cosa juzgada, exige una definición jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto planteado. También en Sentencia T-498 de 2000, la Corte se refirió a la facultad de decretar pruebas de oficio en un caso de tutela instaurado a favor de una menor de edad de edad que padecía un tumor cerebral. En esa oportunidad, señaló, que el juez constitucional como principal garante de los derechos fundamentales debe adelantar actuaciones mínimas y razonables para la verificación de los hechos sometidos a su consideración, lo cual reclama del juez una mayor participación en la búsqueda de la máxima efectividad de la Constitución.

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Dada esa facultad, el despacho procederá a decretar pruebas de oficio, en busca de verificar los hechos sometidos a consideración, por lo que requerirá a la **Organización Clínica General del Norte** para que en el término de dos (2) días, como anexos a sus informes, allegue al despacho:

“(i) Historia Clínica del señor Javier de Jesús Donado Gutierrez, identificado con C.C. No. 1.043.155.505

“(ii) Informe si presta los servicios requeridos para el tratamiento médico que requiere el accionante Javier de Jesús Donado Gutierrez.

“(iii) indique si hace parte de la red prestadora de servicios de la Nueva E.P.S.”

De igual forma, se requerirá a la **Nueva E.P.S.**, para que en el término de dos (2) días, como anexo a su informe, certifique si la Organización Clínica General del Norte hace parte de la red prestadora de servicios de la Nueva E.P.S.

Ahora bien, decidido lo anterior, se advierte a las partes que el trámite de la presente acción de tutela se adelantará a través de los medios electrónicos y las decisiones se notificarán a las cuentas de correo electrónico que las partes informen a la Secretaría del Despacho.

Los informes, memoriales y recursos a los que tengan derecho las partes se presentarán a través del correo electrónico institucional del Despacho adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co

Las decisiones que se adopten durante el trámite tutelar se registrarán en el software de gestión judicial “Siglo XXI”, que podrá ser consultado en la página web de la Rama Judicial en el link <https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida>

Por último y al reunir los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y de conformidad con lo establecido en el núm. 2º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000 y decreto 1983 de 2017, se,

RESUELVE:

1. ABSTENERSE de decretar la medida provisional solicitada por el accionante de conformidad a lo expuesto en la presente providencia.

2. ADMÍTASE la demanda de tutela interpuesta por el señor **JAVIER DE JESUS DONADO GUTIERREZ**, contra la **NUEVA E.P.S.**

3. VINCULESE al presente trámite a la **Organización Clínica General del Norte y a la Organización Clínica Bonnadona - Prevenir** ante eventuales ordenaciones que se impartan por el despacho

4. NOTIFÍQUESE personalmente el contenido de este auto al Representante Legal de la **Nueva E.P.S.**, de la **Organización Clínica General del Norte; Organización Clínica Bonnadona - Prevenir** y/o quienes hagan sus veces, por el medio más expedito y eficaz.

5.- COMUNÍQUESE el contenido de este auto al accionante, por el medio más expedito y eficaz.

6. REQUIÉRASE a la **Organización Clínica General del Norte** para que en el término de dos (2) días, como anexos a sus informes, allegue al despacho:



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

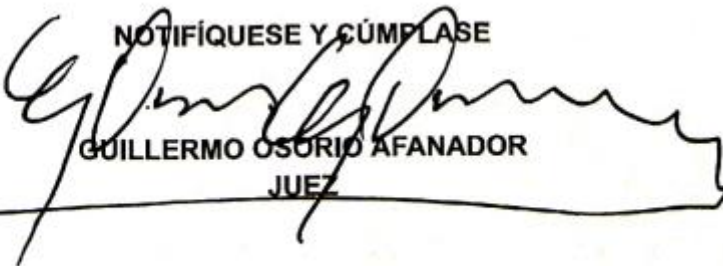
“(i) Historia Clínica del señor Javier de Jesús Donado Gutierrez, identificado con C.C. No. 1.043.155.505 (ii) Informe si presta los servicios requeridos para el tratamiento médico que requiere el accionante Javier de Jesús Donado Gutierrez. (iii) indique si hace parte de la red prestadora de servicios de la Nueva E.P.S.”

7.- REQUIÉRASE a la **Nueva E.P.S.**, para que en el término de dos (2) días, como anexo a su informe, certifique si la Organización Clínica General del Norte hace parte de la red prestadora de servicios de la Nueva E.P.S.

8.- INFÓRMESE a la entidad demandada y a las vinculadas, que en el término de dos (2) días y por el medio más expedito pueden rendir informe sobre los hechos objeto de la presente acción, advirtiéndole que la información suministrada se considerará rendida bajo la gravedad del juramento y que la inobservancia a contestar acarrea las sanciones consagradas en los Arts. 19, 20 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

9.- TÉNGANSE como pruebas, en lo que fuere conducente, los documentos aportados por la parte demandante en su escrito tutelar.

10.- REITERAR que las comunicaciones, memoriales, informes y recursos con ocasión de éste trámite, se recibirán en la cuenta de correo electrónico : adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO
N° 085 DE HOY 14/08/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA